La construcción de modelos de redacción de sentencias con perspectiva ciudadana y lectura fácil.

Las partes que intervienen en una controversia judicial, tienen derecho a que se declare una sentencia apegada a los principios constitucionales de legalidad, es decir, que cumpla con la debida fundamentación y motivación, pero sobre todo a que se encuentre redactada en forma entendible para todos los ciudadanos, lo que nos lleva a considerar que no sólo las partes en conflicto deben entender lo resuelto, sino la sociedad en general.

La emisión de una resolución es un derecho de acceso a la justicia de la sociedad en general y no solamente de las partes en conflicto, si bien la misión del juzgador es resolver con imparcialidad un conflicto en particular no menos cierto es que cada sentencia va creando precedente que delimita la interpretación de las normas, cuestión de especial relevancia en la materia electoral.

Las sentencias con perspectiva de ciudadanía encuentran su justificación en los principios de justicia abierta, que responde a una demanda social que tiene su raíz en el concepto de democracia.

En materia electoral, el concepto de perspectiva de ciudadanía implica reflexionar sobre los deberes y derechos de los ciudadanos en una democracia participativa, velando porque los procesos electorales se ajusten a principios fundamentales como la equidad, la no discriminación, la igualdad, la libertad, y la participación.

En el actuar del juzgador la sentencia debe estar escrita en un lenguaje claro que permita al lector su entendimiento, lo que implica hablar con transparencia. La emisión de sentencias con perspectiva ciudadana, en un lenguaje claro y escritas de tal manera que sean entendibles al común de la población, abona a los principios de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración.

Se afirma, que los juzgadores al emitir sentencias entendibles y de fácil comprensión rinden cuentas de manera efectiva a los ciudadanos, para que la sociedad sea sabedora si se imparte justicia en forma real la decisión debe cumplir con el principio de fundamentación y motivación.

Para que la sociedad participe y se involucre en la justicia electoral es necesario que sepa lo que se está decidiendo, es decir que participe y colabore en los temas que se están decidiendo. Por lo tanto, es necesario que la sentencia que dirima la controversia no solo cumpla con la función de impartir justicia, sino que atienda a los principios de tribunal abierto, como son lenguaje claro, argumentación, estructura y extensión.

Los tribunales electorales deben hacer un esfuerzo por transmitir el mensaje decisorio en lenguaje claro, entendible, lectura fácil para hacer accesible la información escrita, aunque inevitablemente tengan que hacer uso del lenguaje técnico del derecho, es decir, tienen una tarea adicional cuando usan el lenguaje de los derechos humanos.

Esa tarea adicional, es empoderar a la ciudadanía para que comprenda la dimensión social del reclamo que se plantea, más allá de lo legal además de que sea un instrumento útil para lograr un cambio social.

Es importante que la emisión de la sentencia, no sólo se dirija a las partes en litigio, sino a una audiencia más amplia, pues quienes lean la sentencia entiendan sus efectos y el verdadero sentido de empoderamiento ciudadano, lo que les permitirá colaborar en un cambio cultural, así como el uso de lenguaje de género.

El lenguaje de género es una forma de representación y el uso de las palabras o el orden en que se utiliza puede conllevar un mensaje de privilegio o de prioridad, el lenguaje que no es incluyente tiene un déficit democrático, por esta razón dicho lenguaje también debe ser utilizado en la redacción de las sentencias.

De igual forma, las resoluciones deben tener una función educativa, utilizando el discurso de la igualdad, en conclusión, el lenguaje ciudadano utilizado en las sentencias no se reduce a la claridad y precisión sino debe ser sensible al aspecto social de los conflictos que se presentan para su resolución con el fin de empoderar a las personas.

Por cuanto hace a la argumentación de las resoluciones en materia electoral con lenguaje ciudadano y claro, debe ser comprensible para toda la ciudadanía sin necesidad de conocimientos técnicos o especializados en derecho, este tipo de redacción tiene el objetivo de que cualquier ciudadano entienda cómo y por qué se toma la decisión, y cómo esa decisión afecta sus derechos y participación en el sistema electoral.

Por lo tanto, un juez comprometido con la justicia abierta debe tener presente que la sentencia o resolución se encuentre redactada en forma corta, incluyendo un índice que guíe al lector y un glosario que explique los tecnicismos dividiendo el documento en apartados, títulos y subtítulos para darle estructura, además de iniciar con el sentido de la decisión, identificando el problema jurídico a resolver, dejando de utilizar transcripciones innecesarias en lenguaje fácil, abierto, entendible, lo que la convierte en una sentencia ciudadana.

No debemos de perder de vista que los lectores de una sentencia pueden ser cualquier persona por ello la claridad, precisión y sencillez en el contenido de las resoluciones acercara a los interesados, ello permitirá el alcance de los objetivos de la determinación judicial, como son la justificación de la decisión judicial; el conocimiento de los destinatarios de la norma para cumplir con aquello que en ella se dispone el control inter e intra orgánico de la actividad jurisdiccional; y la rendición de cuentas como control social o no institucionalizado, pues la sentencia es el instrumento principal con la cual el juez se comunica con las partes en contienda, pero además con la sociedad, en la justicia moderna las personas, confían en el rigor y calidad de los profesionales del derecho, pero al mismo tiempo se encuentra con el problema de que no los comprenden, o en el mejor de los casos comprenden con dificultad, por ello, es importante que el juzgador logre el objetivo de comprensión y corrección lingüística para lograr una redacción de fácil lectura sobresaliendo el orden precisión, que la narración se ajuste a lo acontecido de manera integral en la enumeración de personas, circunstancias que la argumentación sea explícita en lenguaje en lenguaje inteligible que la exención de los párrafos se limite razonablemente.

El uso correcto de los signos de puntuación para hacer posible la comprensión y evitar palabras en desuso, y el uso de locuciones latinas.

Aunado a lo anterior, el juzgado se encuentra comprometido de realizar ajustes necesarios al momento de resolver, teniendo presente inclusive que la decisión puede ir dirigida a sectores vulnerables como personas con discapacidad intelectual, menores de edad, adultos mayores, con lo cual se encuentra en el deber reforzado de decidir con una adecuada comunicación y comprensión lo que se denomina ajustes adecuados para que lo entiendan en forma clara y sean participes de la actividad electoral, como lo es el sistema braille y el uso de señas mexicano para personas con discapacidad, así como para las comunidades históricamente oprimidas, todo con la finalidad de que se rompan las barreras de la comunicación, privilegiando siempre a favor de los grupos vulnerables el acceso a la justicia pronta y expedita este derecho, reconocido tanto en la constitución, como en tratados internacionales suscritos por el Estado, debe ser garantizado sin restricciones arbitrarias, y en condiciones de igualdad, equidad y accesibilidad, eliminando cualquier obstáculo que impida su participación.

Las sentencias en materia electoral no solo deben centrarse en la legalidad de los actos, sino también debe enfocarse la protección efectiva de los derechos humanos siempre con una visión inclusiva que garantice la participación de todos los sectores de la sociedad.